



INFORME DE LA COMISION POLITICA

I.- El drama de la pandemia,- que sigue aumentando el número de infectados en África, India y América Latina, y sigue golpeando en Europa-, se mantiene en el centro de la preocupación de los gobiernos, junto con las consecuencias económicas que pueden derivarse de la paralización económica, que ya ha tenido un impacto considerable en Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Italia, Francia y Alemania, a diferencia de la recuperación paulatina de los países del oriente asiático.

Pese a la preocupación por la pandemia del Covid-19, no han disminuido las disputas internacionales, como reclamó el secretario general de la ONU. En Europa, a las crisis abiertas de Ucrania y a la tensión en las fronteras orientales por el reforzamiento del dispositivo militar de la OTAN, se ha añadido el intento de Maidán en Bielorrusia, y ha aparecido un novedoso enfrentamiento entre dos miembros de la OTAN, Francia y Turquía, a propósito del apoyo francés a Grecia y Chipre, enfrentados con Ankara por los derechos de prospecciones petrolíferas en aguas del Mediterráneo oriental.

En el fondo del escenario, el plan urdido en Washington, Varsovia y Praga, para derribar al gobierno de Lukashenko, en un nuevo Maidán semejante al golpe de Estado en Ucrania de 2014, y acercar así aún más las fronteras de la OTAN a Rusia.

El deplorable papel de la Unión Europea, optando por sancionar a Minsk, y siguiendo, como en Ucrania, el guion establecido por Washington, está siendo acompañado de maniobras de la OTAN cerca de las fronteras de Bielorrusia, en un acto que, a todas luces, es una advertencia a Moscú y una muestra de la determinación de Estados Unidos de liquidar gobiernos molestos.

En América Latina se abre un incierto período que puede agravar duramente la vida de centenares de millones de personas, periodo en el que destacan el interminable episodio de las elecciones en Bolivia - que el gobierno golpista de Añez pretende convocar a conveniencia-, la posibilidad de cambio que se ha abierto en Ecuador, -con la incorporación de Correa a la carrera electoral-, el creciente desgobierno de Bolsonaro en Brasil, la continuación de las protestas chilenas y el efecto de la pandemia en todo el continente, con especial peligro en México, Perú, Argentina y Brasil, La situación de Colombia con una serie interminable de asesinatos de líderes campesinos y políticos y el apoyo a ultranza de EE.UU. al acusado Uribe, Chile con un referéndum de cambio de

constitución que el Gobierno ensayará de nuevo de eliminar o Cuba y Venezuela que continúan con las sanciones en plena crisis humanitaria por el coronavirus ponen aun más negro el panorama. En este marco complejo se celebra el aniversario de la Unidad Popular chilena e igualmente celebramos la petición hecha por partidos, colectivos y personalidades de que Cuba reciba el premio nobel de la Paz por su enorme esfuerzo en pleno bloqueo de hacer llegar la ayuda humanitaria a países desfavorecidos o muy atacados por la pandemia.

El imperialismo sigue tratando de anular toda posibilidad de soberanía popular que ponga en cuestión su hegemonía o peligro sus intereses. Venezuela viene siendo objeto de agresiones Imperialistas desde hace años y todos los mecanismos de presión en su contra están generando un tremendo sufrimiento al pueblo venezolano. Las contradicciones propias de una situación de sabotaje y agitación por parte de aquellos que quieren una guerra civil con intervención extranjera, requiere la máxima unidad popular en torno al gobierno legítimo. Si de algo sabemos los españoles es de la necesidad de primero ganar la guerra y después seguir profundizando en los avances socialistas, y es en este sentido en el que vemos con preocupación la división en el campo de la izquierda organizada y llamamos a la unidad

En el continente africano, el infierno libio, con los naufragios de refugiados en el mar Mediterráneo, pone ante los ojos del mundo la responsabilidad de las potencias occidentales que destruyeron el país y que se han desentendido del sufrimiento de la población. El reciente golpe de Estado en Malí, donde los militares golpistas han desalojado del poder a otro golpista, Ibrahim Boubacar Keita, y donde Francia, pese a contar con un destacamento militar, no consigue detener la acción de grupos *yihadistas* que se mueven por todo el Sahel, pone de manifiesto también el error de una política neocolonial seguida tanto por Francia como por Estados Unidos que no hace sino agravar los problemas históricos de la región. Se suceden los enfrentamientos armados en Nigeria, y la expectativa de un nuevo conflicto ante la tensión contenida por las consecuencias de la nueva presa del Nilo Azul que construye Addis Abeba y que enfrenta a Egipto, Sudán y Etiopía. En Oriente Medio, además de los desastres provocados en Libia y Siria, Gaza es atacada sin piedad por el ejército israelí, el Líbano que sufría ya una enorme crisis económica y de gobernanza ha sido devastado por una explosión que parece claro que se podía haber evitado con decenas de muertos y destrucción.

En Asia, las diferencias entre China e India no se han resuelto, aunque ha cedido la tensión en la frontera entre ambos países, mientras en Cachemira el gobierno de Modi impone sus condiciones *manu militari*. Y Estados Unidos presiona en la ONU para imponer nuevas sanciones a Irán.

De esta manera los EEUU y sus aliados de la UE tratan de recuperar el clima de Guerra Fría con bloques de Estados y áreas de influencia cerradas que reactiven las alianzas militares para beneficio de la industria militar USA, y limite la soberanía de los Estados para decidir un modelo plural de relaciones económicas, comerciales e incluso políticas. La novedad de la actual coyuntura es que en esta ocasión el eje del Atlántico Norte esta tensando demasiado la cuerda al llevar el muro de separación a la misma frontera rusa y

al mar de la China, pretendiendo acorralar a Rusia y a China, lo que puede suponer un mayor peligro para la Paz mundial.

Sin duda, las tensiones más importantes que se suceden hoy en el mundo son las que enfrentan a Estados Unidos y China. Tras la inconclusa guerra comercial, Estados Unidos ha declarado ahora la guerra tecnológica a China. Una cuestión enormemente significativa a la que se ha prestado poca atención, es el comportamiento de los organismos internacionales, de manera especial la ONU, que han estado prácticamente desaparecidos en esta situación de emergencia que sufre la humanidad, evidenciando la escasa capacidad de actuación lo que nos debe llevar situar en nuestras propuestas de política internacional la necesidad de repensar un nuevo orden internacional. Un modelo que entierre definitivamente el derivado de la Guerra Fría y que además de poder responder eficazmente a las amenazas, riesgos y problemas globales, también pueda impulsar la construcción de una Comunidad Internacional que pueda trabajar para garantizar el bien común para toda la humanidad, mediante un modelo de gobernanza mundial multilateral con benéficos compartidos para todos los pueblos del Planeta.

Para avanzar en un proceso de estas características, tenemos que conjugar la propuesta política y el debate académico con la capacidad para influir en la coyuntura internacional mediante movilización popular de masas, porque sin la actuación organizada de los pueblos será imposible que se pueda afrontar con éxito un cambio real que dé paso al nuevo orden internacional que alumbra a una nueva etapa en la historia de la humanidad.

II.- Las pasadas elecciones vascas y gallegas

Las elecciones autonómicas celebradas en Euskadi y en Galicia el pasado 12 de julio supusieron la finalización del ciclo de elecciones autonómicas de 2019, donde ya hubo descensos acusados en el voto a Unidas Podemos. En primer lugar, reiteramos en este Informe nuestro agradecimiento a la militancia comunista, de IU, de las distintas organizaciones que forman parte del espacio UP y a todas aquellas personas que han trabajado en ambas campañas electorales.

Las elecciones se han desarrollado en un contexto histórico de pandemia por el Covid-19, marcadas por la incertidumbre y el miedo a nuevos rebrotes, que auguraban una desmovilización por parte de la ciudadanía. No obstante, llama la atención la participación en Galicia que ha aumentado en más de 5 puntos respecto a las anteriores, mientras que en Euskadi sí se ha notado la desmovilización como resultado de la crisis sanitaria que vivimos, situándose en los mínimos históricos, bajando más de 7 puntos respecto a las anteriores elecciones.

En ambos territorios ha habido unos resultados insatisfactorios para UP, en parte ya esperados, aunque no esperamos tan mal resultado en Galicia, donde sin duda ha fracasado el modelo de convergencia construido en torno a las denominadas mareas y partidos instrumentales. En este caso, y quizás en menor medida en Euskadi, queda claro que las situaciones de conflictividad interna permanente se castigan por los electores. Lo anterior, sin que olvidemos

que ha habido una alta abstención y una campaña electoral que ha transcurrido en medio de constantes ataques mediáticos a UP en toda España. Estos resultados también están relacionados con la debilidad organizativa y escasa implantación territorial del espacio Unidas Podemos. Por ello tenemos la necesidad de establecer marcos de debate internos amplios en UP y de trabajar sistemáticamente por normalizar el entendimiento en cada territorio entre las distintas organizaciones de UP, en especial normalizando las relaciones por la base.

Tanto en Euskadi como en Galicia la izquierda nacionalista ha conseguido difuminar nuestra principal fortaleza, que gracias a Unidas Podemos en España hay un gobierno que está demostrando por la vía de los hechos que se puede gobernar al servicio de las familias trabajadoras.

El cierre de este ciclo electoral aparece marcado por el descenso de apoyos de nuestro proyecto y, coincide con numerosos conflictos internos en Unidas Podemos en muchos territorios, donde las relaciones continúan siendo difíciles o escasas tras más de 4 años de puesta en funcionamiento del proceso de convergencia, conflictividad que incluso ha provocado escisiones muchas veces aireadas y amplificadas por los medios de comunicación. A pesar de la debilidad organizativa y la aun escasa implantación territorial, Unidas Podemos es nuestro espacio de convergencia política y unidad de la izquierda, tal y como hemos decidido en los sucesivos acuerdos adoptados tanto por los órganos del PCE como de IU.

En el actual momento político, formando parte del gobierno de España, nuestra estrategia solo puede ser construir convergencia política entorno a la actual Unidas Podemos, ampliándola si es posible, pero no reduciéndola. No tenemos otra alternativa ni existe propuesta alguna que formule proyectos alternativos

III.- Inicio de un nuevo curso político tras el curso de la repetición electoral y formación de primer gobierno de coalición de izquierdas en 80 años

Iniciamos un nuevo curso político tras el convulso curso anterior en el que nada más comenzar su actividad, el gobierno de coalición ha tenido que enfrentar la más grave crisis vivida al menos desde el final del franquismo. El Estado de Alarma y la crisis económica provocada por la pandemia nos obligó a priorizar la acción del gobierno en la puesta en marcha del denominado “escudo social”, un conjunto de medidas de protección a nuestro pueblo que conseguimos levantar gracias al trabajo conjunto entre los sindicatos de clase -en especial CCOO, UGT y CGT-, las organizaciones y movimientos sociales, las organizaciones políticas del espacio Unidas Podemos y nuestros equipos de trabajo en el nuevo Consejo de Ministros.

Un trabajo que podía haber sido mejor sin duda, pero que supuso un gran esfuerzo por el bloqueo no solo de la oposición política parlamentaria, sino también de la oposición institucional existente en los distintos aparatos del Estado que no han aceptado la entrada de una fuerza política de izquierda transformadora en el Consejo de Ministros.

Uno de nuestros objetivos esenciales en este momento es mantener en el Consejo de Ministros, tanto para impedir el cierre de la crisis de régimen actual con una salida conservadora o meramente reformista, como para mantener y mejorar el escudo social levantado en un momento político muy difícil en el que no parece que este cerca el fin de la pandemia y sus consecuencias sanitarias y sociales, como en general para poner en marcha políticas de transformación social. Ello no significa que solo por permanecer en el gobierno alcancemos los anteriores objetivos, sino que debemos continuar acompañando y coordinando nuestra intervención en el gobierno con el fortalecimiento de nuestra presencia en los conflictos sociales a la vez que incrementamos las tareas de construcción de la unidad popular.

Durante el momento más difícil de la crisis, nos hemos enfrentado a la inmensa dificultad de financiar el escudo social levantado y las nuevas medidas de atención social estructurales que hemos aprobado -como el aun limitado IMV- o que aprobaremos en el futuro. Y hemos comprobado la insuficiencia de recursos de un Estado infra financiado a consecuencia de la reducción de la recaudación fiscal por las sucesivas reformas tributarias neoliberales, consistentes en disminuir la fiscalidad de quienes más tienen y mantener o aumentar la fiscalidad sobre las rentas del trabajo más modestas.

Nuestra presencia en el Gobierno debe servir para poner en marcha una reforma fiscal progresiva y a continuación, políticas de planificación y dirección de la actividad económica e industrial por el Estado y las instituciones públicas, para posibilitar la soberanía económica y productiva de nuestro país y la garantía de todos los derechos sociales y económicos.

Para ello tendremos que combinar tanto las actuales herramientas normativas-incluidas las previsiones de los artículos 128 y ss de la CE- como los necesarios cambios políticos, legislativos e institucionales, solo posibles si reforzamos la actual mayoría de gobierno con una cada vez más amplia mayoría social que apoye esta tarea. La coordinación con los sindicatos y movimientos sociales y el fortalecimiento del espacio político de Unidas Podemos es esencial para construir esa correlación de fuerzas políticas y sociales favorable a los profundos cambios sociales que defendemos.

La crisis económica ha provocado un descenso de los ingresos fiscales del Estado a la vez que un gran incremento del gasto público para atender al denominado Escudo social, a diferencia de la priorización del gasto en rescate de bancos ocurrido en la crisis del 2011. El gobierno de coalición se encontró sin suficientes recursos para atender el gasto corriente y el mantenimiento del escudo social. España ha tenido que negociar en la Unión Europea el plan de financiación económica para los países más afectados por la pandemia, para obtener los recursos necesarios para hacer frente a la situación y poner en marcha las medidas más necesarias para el denominado proceso de reconstrucción post covid.

IV.- Las contradicciones en entorno al Plan de Recuperación de la Unión Europea

Desde el primer momento los países del Sur pedían la mutualización de la deuda y la emisión de "coronabonos", a lo que Alemania se negaba.

A su vez, el Parlamento Europeo aprobó una resolución, con el voto a favor de Unidas Podemos, pidiendo a la Unión Europea un plan de recuperación de 2 billones de euros desembolsados prioritariamente sobre subvenciones con una fuerte dimensión social para atajar las desigualdades sociales y económicas, y responder a los más golpeados por la crisis, centrado en las prioridades del Pacto Verde y de la agenda digital.

En ese contexto se inician las negociaciones en las que la postura de España es que el fondo no baje de los 750.000 millones, que las condiciones para recibir las ayudas no sean condicionadas a recortes sociales, sino en todo caso al pacto verde y la transición digital, y que el fondo se ponga en marcha cuanto antes.

Finalmente el Acuerdo del Consejo Europeo de 21 de julio supone 750.000 millones financiados con deuda conjunta, una movilización de recursos del 17% de la Renta Nacional Bruta de la Unión Europea, de los que 390.000 millones serán ayudas directas (52%) a fondo perdido y 360.000 millones serán préstamos (48%) a bajo interés que empezarán a devolverse a partir de 2027 y tendrá un plazo de amortización de 30 años.

De este fondo, España obtendrá 140.000 millones, 72.700 millones en ayudas directas no reembolsables. Aunque por primera vez en la historia de la Unión Europea se aprueba un paquete de subvenciones financiado con deuda conjunta, se aumentan las compensaciones económicas a los países denominados *frugales*.

Uno de los principales problemas será la utilización que los países del norte de Europa efectúen del denominado "freno de emergencia", mediante el cual un Estado miembro podrá remitir algún asunto al Consejo Europeo y pedir que se haga un seguimiento, correspondiendo la decisión final al Consejo Europeo.

El Parlamento Europeo, única institución de la UE elegida directamente por la ciudadanía, no ha tenido el peso político necesario en este proceso, lo que pone de manifiesto el déficit democrático estructural de la arquitectura de la Unión Europea. También es criticable que el acuerdo ha conllevado recortes en el Fondo para la Transición Justa, ideado para descarbonizar Europa; en el programa de Salud, en el presupuesto para Desarrollo Rural y en el programa europeo de I+D. Sin duda esto es un elemento negativo. Entre los elementos positivos, por primera vez el Consejo asume propuestas de la Comisión y el Parlamento sobre la obtención de recursos propios, un primer paso en la puesta en marcha de una política fiscal de la UE: en el año 2021 se introducirá una tasa común sobre el plástico de un solo uso, y en el año 2022 se introducirán impuestos al carbono y una tasa digital aún por definir.

En este acuerdo se han pactado unas cantidades que se alejan mucho de nuestras aspiraciones y somos conscientes de que deja abierta la posibilidad de que se impongan condiciones antisociales en los siguientes años para que se liberen las ayudas comprometidas, cuestiones todas ellas que reafirman nuestro análisis del carácter neoliberal de la UE y nuestros planteamientos de que es necesario un nuevo modelo de integración europea incompatible con

el actual. Un modelo más social, más democrático y más respetuoso con las soberanías nacionales.

Pero siendo conscientes de la reducción de los ingresos fiscales del Estado operada por la crisis, el difícil horizonte de aprobación de unos PGE que nos alejen de los del gobierno de Rajoy que viene siendo sucesivamente prorrogados, y las dificultades que enfrentaba el gobierno de coalición para sufragar el escudo social levantado y los gastos corrientes de funcionamiento sin proceder a efectuar recortes, sin duda hemos de valorar positivamente el hecho de que por primera vez se haya aprobado cantidades de esta magnitud en transferencias directas a los Estados, rompiendo con la receta austericida que se aplicó en la crisis de 2008, con resultados catastróficos para los pueblos del sur de Europa.

Desde esta necesidad de conjugar el horizonte estratégico que tiene que seguir siendo contrario a una UE irreformable, con la necesidad táctica de poder disponer de unos recursos de los que hoy no puede disponer el Gobierno sin recurrir a financiación exterior, debemos centrar en sus justos términos el resultado de la cumbre: ni es un desastre sin paliativos ni un éxito sin precedentes. Este acuerdo es menos de lo que se necesita pero mejor de lo que otras veces se ha acordado. Pongamos en valor las evidentes diferencias entre este acuerdo y la respuesta dada por las instituciones europeas a la crisis financiera de hace 10 años: austeridad, hombres de negro y exigencias de recortes sociales que provocaron un inmenso drama entre los pueblos del sur de Europa

V.- El debate sobre las medidas de reconstrucción social y económica tras la pandemia

El debate social sobre la reconstrucción y la Comisión Parlamentaria creada al efecto eran una oportunidad para discutir en la sociedad si la prioridad de las políticas de gobierno debe ser el interés común o el simple mantenimiento de los beneficios de los sectores privados como supuesto motor de la economía según defienden las fuerzas de derechas y neoliberales. Nuestro objetivo era dar la batalla ideológica sobre el fortalecimiento de los servicios públicos como único mecanismo de garantía de la seguridad humana, para cumplir con el imperativo de que nadie quede desprotegido ante el impacto social y económico del COVID 19.

Quizás por el limitado trabajo realizado por las fuerzas políticas del espacio Unidas Podemos -puede que excesivamente limitado al ámbito del grupo parlamentario en el Congreso- y a pesar del esfuerzo de muchas organizaciones sociales y sindicales, la ofensiva de los grupos parlamentarios de la derecha y la actitud timorata del PSOE en muchos puntos del debate han impedido que se avanzara todo lo que hubiera sido necesario.

El debate programático e ideológico en el marco de la comisión parlamentaria ha sido intenso, como también lo ha sido la movilización de plataformas y organizaciones sociales interesadas en participar en dicho debate.

A pesar de las constables insuficiencias y ambigüedades que incluye, el

dictamen final es un instrumento muy poderoso para avanzar en políticas públicas que consoliden el "escudo social", una hoja de ruta cuya concreción dependerá, en última instancia, de la capacidad de la izquierda en el Gobierno y en las instituciones, pero también de la movilización social, de la articulación de la fuerza suficiente para imponer la lógica de la mayoría social.

Los contenidos recogidos en el dictamen no son acuerdos normativos, no tienen el carácter de una ley o un reglamento, sino mandatos fruto de una amplia reflexión social y la hegemonía de un sentido común que entiende que sólo desde lo público se garantizar todos los derechos fundamentales para todas las personas, en especial los sociales y económicos.

Corresponde asumir estas conclusiones como un mínimo que debe ser desarrollado con urgencia, al tiempo que no renunciamos a ampliarlo y profundizarlo con el conjunto de medidas recogidas en el acuerdo de coalición firmado con el PSOE para sustentar la acción del gobierno durante toda la legislatura.

Pero en el grupo de políticas sociales ha sido imposible construir una mayoría política que permitiera aprobar un Dictamen que suponía un cuestionamiento de las políticas neoliberales aplicadas en los últimos decenios. Los grupos nacionalistas de derecha no han dudado en apoyar las posiciones más neoliberales con la excusa de la intención recentralizadora de algunas de las medidas han mantenido una actitud beligerante, se ha sumado la posición timorata. A ello se ha sumado una posición del PSOE de bloqueo de varias enmiendas transaccionales que UP había alcanzado con los grupos nacionalistas de izquierda.

UP trabajó un texto para dar mayores garantías de exigibilidad y cumplimiento a los derechos constitucionales a la educación, la sanidad, las pensiones, el acceso a rentas mínimas, a viviendas sostenibles, así como su extensión a lo relativo a la protección del consumidor vulnerable, para que nadie sufra recortes de suministros y de servicios básicos, que también debe extenderse a fortalecer y desarrollar los servicios sociales.

VI.- La ofensiva de la derecha y de la ultraderecha contra nuestra presencia en el Gobierno

En los próximos días asistiremos al debate de la moción de censura de VOX contra este Gobierno, iniciativa con la que la ultraderecha intenta alcanzar el liderazgo político en el espacio político de la derecha. Esta estrategia de la extrema derecha está provocando una profunda crisis política e institucional en España, debido a la falta de respeto por los anteriores de los mínimos principios del juego democrático y la convivencia. Todos los valores democráticos y de tolerancia que impulsó el PCE desde la aprobación de la política reconciliación nacional al final de la dictadura, están siendo enterrados por la extrema derecha con la permisividad del PP. Están convirtiendo la política del odio en un medio para ampliar su apoyo social y electoral. Esta estrategia de la derecha es muy peligrosa. Amenaza la convivencia en una sociedad democrática y parece que estemos cerca de traspasar una línea roja que no tendrá fácil retorno si la sociedad y las

instituciones competentes no frenan esta deriva violenta y de odio. El acoso al Vicepresidente Segundo y a la Ministra de Igualdad es más visible, pero es solo una parte del problema. Empiezan a aparecer grupos organizados violentos como las recientemente amenazaban de muerte a dirigentes de Unidas Podemos en Andalucía y han agredido a nuestro compañero Pedro Sosa, concejal de IU-Verdes de Lorca (Murcia) por defender a una familia de origen marroquí que estaba siendo acosada. Desde hace meses se suceden los ataques y amenazas a personas de izquierdas que ostentan responsabilidades políticas o institucionales, desde ministras a concejales, como ha sido el caso del ataque a sus viviendas y vehículos sufridos por el alcalde Izquierda Unida en Navas de Estena (C Real) Isidro Corsino o el secretario político del PCE en Castilla León y concejal de Miranda de Ebro Guillermo Ubieta.

La democracia está demostrando una seria debilidad y una incapacidad para mantener el respeto a todas las personas y las normas esenciales de tolerancia y convivencia. El PCE debe poner en marcha planes de actuación en todos los territorios para contribuir a preservar los valores democráticos de convivencia, tolerancia y respeto a las minorías, en especial donde tengamos influencia social o en la acción de gobierno.

VII.-El reinicio del curso escolar y la negociación de los PGE 2021, nuestras siguientes batallas políticas:

El curso político que se inicia aparece cargado de conflictividad social y política. Así lo acreditan los resultados de la EPA de julio, que deja, durante el segundo trimestre de este año, la cifra de casi un millón de nuevas y nuevos parados. Y es especialmente interesante que analicemos lo referente a los sectores económicos en los que han crecido porque pueden ofrecer una vista sobre dónde pueden darse más fácilmente los distintos conflictos obreros y donde es importante que el Partido esté presente organizándolos.

Estudiando la tendencia desde el primer trimestre de 2019 vemos que las y los parados en el sector de la agricultura han disminuido. La situación de pandemia, la extrema necesidad de mano de obra en los últimos meses ha provocado más formas de empleabilidad, en la mayoría de las ocasiones con altos grados de precariedad y a veces irregular. Destaca también que esa disminución del paro sea más acusada entre las mujeres.

El desarrollo en sector de la industria es justamente contrario y deja más de 230.000 parados frente a los 165.000 del mismo trimestre el año pasado. El cierre de pequeñas empresas durante la crisis, la absorción del trabajo que estas realizaban por parte de las grandes empresas y el continuo proceso de deslocalización de grandes multinacionales han influido en este proceso. Para el Partido Comunista de España es inasumible que en un momento de excepcionalidad como el que vivimos, frente a la necesidad de diferentes bienes para dejar atrás la pandemia y frente a la imprescindibilidad de empleos dignos y estables sea la industria precisamente quien sufra este proceso. Por ello situamos como uno de nuestros objetivos estratégicos conseguir que el gobierno de coalición ponga en marcha un plan estratégico de reindustrialización de España, objetivo por el que el PCE trabajará junto a los sindicatos de clase.

Duro es también el golpe que la crisis deja en el sector servicios donde hay más de un millón y medio de parados, siendo casi 400.000 más que para el mismo trimestre del año 2019. Aún así hay que recordar que la tendencia en el sector es que exista un paro estructural superior al millón de personas, y que la pandemia no ha sido más que un catalizador para la destrucción de empleo en un ámbito en el que este ya se da de manera frecuente, sobre todo, por las fórmulas de contratación. En este caso, la caída del turismo han sido los grandes elementos que han precipitado el auge del paro. Justamente este hecho, junto con el deterioro de la industria, hace pensar en la necesidad de articular proyectos de soberanía productiva que permitan la reindustrialización en nuestro país.

El sector de la construcción también cae (alcanza 168.000 personas), sin embargo, mantenido en niveles similares a los del paro estructural (en torno a 135.000) arrastrado durante los últimos meses.

La evolución de la pandemia en las últimas semanas no arroja signos de remisión, sino que se van acumulando datos de un recrudecimiento de los contagios que nos acercan progresivamente a los que se registraban en el mes de marzo de este año. Ante esto, se nos plantea la necesidad tanto de dar pasos necesarios para garantizar derechos que hasta ahora habían sido imposibles de dar, como valorar los elementos cruciales que se marcaban como objetivos a proteger desde nuestra propuesta de Escudo Social.

Por lo anterior, el PCE hemos impulsado la orden del Ministerio de Igualdad de cierre de prostíbulos en las comunidades autónomas, destacando el trabajo de impulso pro muchas federaciones de Izquierda Unida para acabar con esta esclavitud tan extrema que sufren las víctimas de esta situación.

Por ello todos nuestros cargos públicos deben hacer propuestas políticas desde todas las instituciones en especial a los gobiernos autonómicos no solo para apoyar la orden del Ministerio sino para que se dispongan de recursos para atender de manera integral a las mujeres prostituidas y víctimas de la trata.

Es necesario señalar la demanda como la culpable de esta explotación, y por ello el PCE vamos a contribuir con una campaña en redes de sensibilización que señale a los hombres que consumen prostitución como responsables y cómplices de que exista trata para explotación sexual. Nuestras concejalías y alcaldías deben ayudar a impulsar la Red de Municipios Libres de Trata que comporta crear una red de instituciones locales, provinciales, comarcales y autonómicas que desarrollen medidas abolicionistas para concienciar, atender a las mujeres prostituidas y penalizar la demanda con la modificación de las ordenanzas.

Respecto a nuestra obligación de proteger el Escudo Social y a los sectores más frágiles de nuestra estructura social, cobró especial importancia la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como mecanismo de aseguramiento de mínimos vitales a las familias, y tras los meses transcurridos llamamos a realizar una reflexión sobre el funcionamiento y eficacia del

sistema. Vemos con preocupación que la tramitación y gestión de esta ayuda directa a las familias se retrasa y no llega a los solicitantes. Son altamente preocupantes las informaciones que nos van llegando respecto a la denegación de acceso al IMV por incumplimiento de requisitos cuando en muchos casos es contrastable por los diferentes Servicios Sociales la situación de desprotección. Debemos analizar los requisitos que se han de reunir para el acceso al programa, bien para flexibilizarlos en beneficio de las personas y las familias, bien para evitar trabas burocráticas que denieguen el acogimiento al programa por dificultades en la tramitación, tarea política esta que debemos realizar en absoluta coordinación con los sindicatos y organizaciones sociales.

También tenemos la urgente necesidad de dar respuesta y cobertura al colectivo de migrantes que se encuentran en nuestro país sin regularizar. Insistimos en la urgente necesidad de tramitar la iniciativa parlamentaria de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para proceder a una regularización extraordinaria, incluso abriendo un proceso extraordinario y ágil de nacionalizaciones para quienes lo soliciten, como requisito indispensable para que la población migrante pueda ser atendida económica, social, y sanitariamente, conforme a las duras condiciones que la pandemia nos está exigiendo.

Dada la situación de pandemia se hace necesario evaluar en qué situación se encuentra nuestro sistema sanitario público para reforzarlo de inmediato. Valoramos negativamente las políticas implementadas en algunas comunidades autónomas en un proceso que podríamos denominar como "hospital centrismo" que ha rebajado el papel fundamental de la atención primaria. Además las competencias de salud pública, se han centrado en programas en el entorno competencial regional y municipal, pero ha habido una insuficiente potenciación de la responsabilidad de coordinación, planificación, sistemas de información y notificación comunes, etc....

Es indispensable incrementar la coordinación entre los distritos servicios sociales y sanitarios, no solo con niveles asistenciales autonómicos sino otros recursos de asistenciales públicos (sanidad militar, sanidad penitenciaria, protección civil, centros de salud locales o municipales), y privados (con y sin ánimo de lucro). Para garantizar una protección global de la ciudadanía, se deben coordinar lo más posible por el Gobierno de España, para así optimizar todos los recursos de atención a las necesidades sanitarias de la población.

Como partido de la clase trabajadora, nuestra orientación es luchar por el refuerzo del sistema sanitario y sus profesionales, reforzando y mejorando el sistema sanitario de acuerdo a las necesidades actuales, mediante la puesta en marcha de presupuestos finalistas y suficientes y fortaleciendo las estructuras de coordinación, vigilancia y prevención.

En el marco de la pandemia se va a producir el inicio del curso escolar, siendo conocedores de los daños provocados por la interrupción sobrevenida del curso 19/20. Creemos en la necesidad de garantizar la educación presencial en los centros educativos como expresión del derecho básico a la misma, siendo la presencialidad un mecanismo de garantía de la cohesión social puesto que la enseñanza telemática parte de la existencia de la brecha digital

y social, y por tanto no a fecha de hoy un mecanismo apto para los fines de un sistema educativo público y democrático.

Si bien las familias deben comprometerse con un regreso seguro a los centros educativos, la responsabilidad principal de los poderes públicos -central y autonómicos- y no admite desplazamiento ni delegación alguna.

La educación pública requiere los recursos necesarios para afrontar con plenas capacidades y garantías cualquier posible escenario ante la pandemia y para ello necesita presupuesto con el fin de subsanar las deficiencias que la falta de inversión y los continuados recortes han generado en los últimos años.

Contemplamos con preocupación la imposición de medidas de confinamiento selectivo en barrios como estrategia de contención de la pandemia, porque pueden provocar una segregación asociada a la clase que tiene su expresión en el territorio, y se corresponde con la segregación educativa. Es en los barrios en especial de las áreas metropolitanas donde existen más núcleos de pobreza y donde se concentran problemas como la falta de infraestructuras educativas, y masificación de los centros públicos, falta de plazas escolares públicas, y en general segregación escolar. También ocurre en poblaciones rurales con falta de recursos. En uno y otro caso se trata de una vulneración del derecho a la educación.

El PCE debe trabajar para conseguir que se apliquen las siguientes medidas en materia educativa, para garantizar la equidad y seguridad en las aulas, para lo cual deberían utilizarse por las CCAA los fondos especiales COVID:

-Financiación y desarrollo la red educativa de gestión y titularidad pública. Deben introducirse factores que financien los centros, por sus objetivos sociales considerando ítems como: población de riesgo de exclusión social, nivel de renta, ubicación, % de atención a población desfavorecida.

-Becas de material y de comedor, y que garantice la comida escolar caliente para el alumnado, sobre todo los más vulnerables.

-Dar prioridad a la educación presencial, que, no puede ser sustituida por medios telemáticos, salvo el riesgo para la salud, en cuyo caso es requisito indispensable facilitar los medios y recursos necesarios al profesorado y familias.

-Disminuir las ratios profesor-alumno, aumento de los cupos y contratación de personal docente y no docente en los centros que permita grupos desdoblar de forma flexible marcando un máximo de 15 alumnos y que en función de la situación sanitaria que se respeten las distancias de 1,5m.

-Medidas de conciliación efectivas que permitan a las familias atender a sus hijos e hijas cuando haya una situación de confinamiento de los menores. Esto se debe garantizar a través de los permisos retribuidos que se regulen atendiendo las excepcionales circunstancias en que se producen.

-Dar valor a la labor docente y el papel del profesorado instaurando unas condiciones dignas de trabajo. Se requiere por tanto el aumento de las plantillas de los centros (desdoblar las plantillas), medidas de higiene y salud laboral, con la equipación adecuada y la realización de pruebas, volver a los 18 períodos lectivos que proporcionan el tiempo de coordinación y preparación de clases y remuneración de las tareas de tutoría y atención

personalizada, así como garantizar que las sustituciones del profesorado se produzcan en 24 horas desde la comunicación de la baja.

Sobre las cuatro líneas que hemos descrito (IMV, Migraciones, sanidad pública, educación pública y vuelta segura al curso académico) se están produciendo convocatorias de acciones y movilizaciones que apoyaremos como Partido, en línea con los análisis y propuestas que realizamos en este informe.

La reciente noticia de fusión bancaria entre Bankia y Caixabank es una mala noticia y debemos trabajar para que no se concrete. A pesar de que en el acuerdo programático de coalición no pudo introducirse el compromiso de poner en marcha una banca pública, el elevado porcentaje de participación del Estado en Bankia (más de un 60%) debido al rescate efectuado en su día, convertía a esta entidad en una sólida opción para poner en marcha una institución financiera de control público que fuera una herramienta para hacer una política económica al servicio de los trabajadores. Debemos buscar alianzas que permitan conformar una amplia opinión pública contra la absorción de Bankia por CaixaBank, que es realmente lo que se está fraguando, para conseguir que en España exista una institución financiera destacada que permanezca bajo control público. Subsidiariamente, el objetivo debe ser la recuperación de todo el dinero público inyectado en Bankia en la operación de rescate, de manera que la fusión con Caixabank no acabe siendo un auténtico fraude a todos los contribuyentes.

Sin duda alguna la estabilidad del Gobierno y de toda la legislatura depende del fortalecimiento del bloque de la moción de censura y de la investidura. Esa tiene que ser la opción prioritaria y vamos a trabajar para reforzarlo.

A partir de ahí, cualquier apoyo al proyecto de PGE que presentemos desde el gobierno de coalición será bienvenido, pero a la vez hay que cerrar cualquier tentación del PSOE de sustituir a algunos componentes de izquierdas del bloque de la investidura por otras fuerzas políticas que claramente siguen defendiendo las políticas neoliberales que han causado un inmenso daño a nuestro pueblo, por otra parte incapaces de gestionar la emergencia de la pandemia.

También somos conscientes de que mientras no se despeje el panorama electoral catalán, va a ser muy difícil tanto que Ciudadanos deje de ofrecerse al PSOE para alianzas de gobernabilidad como que ERC se comprometa en apoyar cualquier medida propuesta por el gobierno de España, y lo más triste es que esa previsible actitud, sin duda irresponsable, debilita al gobierno de coalición de izquierdas y crea tensiones que pueden ser aprovechadas por la derecha para provocar un nuevo adelanto electoral, además de dificultar la aprobación de unos imprescindibles PGE que nos hagan abandonar de una vez los últimos aprobados para el ejercicio 2018 por el gobierno de Rajoy.

Desde ahora mismo, nuestro esfuerzo debe ir orientado a abrir un debate sobre el PGE que se convierta en un debate sobre los contenidos de la política económica y social derivados del acuerdo de gobierno de coalición y su necesaria concreción presupuestarios.

Centremos el debate en unos presupuestos expansivos de mantenimiento escudo social – en especial el mantenimiento de los ERTES y las prestaciones por desempleo-, que apuesten expresamente por políticas de reindustrialización y de fortalecimiento de los servicios públicos en general, claramente progresistas. Y pongamos en marcha alianzas sociales y sociales para alcanzar estos objetivos. Unos presupuestos que reflejen claramente las políticas de izquierdas contenidas en el acuerdo del gobierno de coalición y que hagan difícil que las fuerzas políticas del acuerdo de investidura se sustraigan a apoyarlos expresamente.

Los próximos meses van a resultar claves en los debates en torno a las medidas a adoptar para alcanzar un cambio estructural en nuestro país. Uno de los principales ámbitos que tiene que ocupar la actividad del PCE es el de la recuperación de la soberanía productiva española, que se traduce no solo en la defensa de los puestos de trabajo en una industria cada vez más mermada, sino en el impulso legislativo para la regulación del teletrabajo o de defensa de los trabajadores autónomos y, por supuesto, para el desmantelamiento de la reforma laboral. Conseguir estos objetivos debe ser el principal objetivo de nuestro trabajo en el Consejo de Ministros.

Especial importancia tendrá el debate sobre la ley de Teletrabajo, probablemente una de las normas que más rechazo provocará entre las organizaciones empresariales que han visto en la pandemia una doble oportunidad tanto de ahorrar gastos de funcionamiento y mantenimiento como de recorta derechos laborales tan duramente ganados como el derecho a la jornada de 8 horas o el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Siendo el teletrabajo una importante herramienta, excepcional, para preservar la salud pública y poder compatibilizar en algunos casos el trabajo y los cuidados, el capital pretende utilizarlo para agravar la explotación con la intensificación del trabajo, con mayor presión para extender el período de trabajo, a la disponibilidad permanente, con la dificultad adicional de definir, controlar e inspeccionar los tiempos de trabajo.

Se pretende una reducción de los costos productivos y una revisión de la remuneración de los trabajadores y eliminar sus derechos imponiendo aún más horarios no regulados, horarios de trabajo continuos, disponibilidad total para trabajar en cualquier momento.

La separación física y un mayor aislamiento de los trabajadores entre sí dificultan la posibilidad de compartir experiencias y tiene impactos negativos en la clarificación, unidad, organización y lucha de los trabajadores.

Por ello, no puede bastar un acuerdo entre trabajador y empleador para regular esta nueva situación, sino que debe ponerse en marcha un proceso de negociación entre los sindicatos y las organización patronales acompañado del Ministerio de Trabajo, que es quien en última instancia deberá garantizar la aprobación de una normativa respetuosa con los derechos laborales.

El PCE estará presente en todas estas batallas tanto con los trabajadores en sus luchas como acompañando nuestra intervención institucional.

También durante el último mes hemos visto como el debate sobre la vivienda se ha hecho especialmente mediático. Esta vez no ha tenido que ver con una oleada de defensa del derecho a techo, sino desde una posición netamente reaccionaria dando a entender que el gran mal en nuestro país son las ocupaciones. Todo ello en un contexto de crisis y donde se hace materialmente imposible la posibilidad de un techo digno para gran parte de nuestro pueblo, en especial para la clase trabajadora, y ello teniendo en cuenta que en España hay más de 3 millones de viviendas vacías.

Este falso debate se debe principalmente a los intentos de las grandes oligarquías y los sectores más reaccionarios de buscar en algunos sectores de la pequeña burguesía una alianza. También se pretende la criminalización de los movimientos que luchan por garantizar el derecho a una vivienda digna, para acabar justificando una posible nueva oleada de represión a los conflictos en tomo a la vivienda (desahucios y desalojos).

Finalmente no olvidamos la profunda crisis que atraviesa la monarquía en estos momentos, una institución anacrónica incompatible con la democracia. En España representa además las garantías que a través de la sucesión en la Jefatura de Estado, se dieron las oligarquías política y económica del franquismo.

En Europa hay otras monarquías parlamentarias, pero en ningún país europeo, como ocurre en España donde la Jefatura de las Fuerzas Armadas está sustraída al control civil y a la voluntad electoral mediante su asignación a un Rey. En España, el jefe de los ejércitos es el jefe del Estado, al cual nunca se le puede revocar ni cambiar. Se trata de un mecanismo autoritario que pone de manifiesto un inmenso déficit democrático en nuestra norma constitucional. Si en algún momento la legitimidad que tenía la monarquía venía dada por su supuesto papel estabilizador democrático en la Transición, ese papel desapareció y perdió cualquier función de neutralidad y mediación institucional que pretendiera arrogarse, sobre todo al tomar partido abiertamente por las posiciones de una parte de los españoles frente a otros en distintas ocasiones.

La constatación por toda España de la inmensa corrupción que rodea desde hace tiempo a la Casa Real, nos sitúa ante otro gran problema: la monarquía ha estado y esta sustraída a cualquier control democrático y legal, algo que no ocurre con otras jefaturas de Estado en países democráticos.

Hasta que los tribunales de Suiza han abierto una investigación judicial no se han hecho en España movimientos para dar la impresión de que se investiga algo, más bien lo contrario, En 2018 se archivó arbitrariamente la querrela por corrupción presentada por el PCE contra el Rey Emérito, por los mismos hechos que ahora investiga la justicia suiza. El PCE ya ha iniciado el trabajo para intentar bien la reapertura de esta querrela o bien el inicio de otras acciones legales que permitan tanto exigir responsabilidades legales al jefe de Estado

cuando se trate de delitos en el ámbito particular, como recuperar el dinero defraudado a las arcas públicas por cualquier actividad de corrupción.

El debate entrar monarquía y república ya está en la calle y en la sociedad. Nuestro pueblo tiene derecho a decidir democráticamente sobre el modelo de Estado que considera más adecuado y por eso continuaremos apoyando el trabajo de las plataformas en defensa de una consulta popular sobre la república. España tendrá que dar pasos hacia una institucionalidad plenamente democrática, a un sistema republicano como ocurre en la inmensa mayoría de países de nuestro alrededor. El PCE haremos todo lo posible para que ese tránsito se haga de la forma más rápida y exitosa posible, y mientras tanto continuaremos reforzando el escudo social y combatiendo la grave crisis económica y social a la que nos enfrentamos.

Somos muy conscientes de que ahora mismo la derecha y la ultraderecha quieren convertir el debate sobre monarquía y república en un elemento más de agresión al Gobierno de coalición, para impedir el mantenimiento y extensión de ese escudo social. Por eso, daremos los pasos de la forma más adecuada para que ese tránsito no provoque perjuicios añadidos a nuestro pueblo y priorizando en este momento de grave crisis económica y social el mantenimiento del escudo social. El PCE es una fuerza claramente republicana y eso es algo de lo que nuestro partido se enorgullece y ha demostrado de forma constante cada día de su historia.

Todo el PCE debe ser consciente de que los próximos meses van a ser determinantes en la lucha por la defensa de una salida socialmente avanzada de la crisis provocada por la pandemia, por lo que hacemos un llamamiento a que el Partido en todos los niveles se implique en la movilización social y política que defensa la aplicación del acuerdo programático del Gobierno de Coalición, frente a quienes van a utilizar todos los métodos, para combatir la presencia de UP en el Gobierno.

VII.- La asamblea federal de Izquierda Unida

Para configurar de forma colectiva las propuestas que el PCE presentará en el proceso de la próxima Asamblea de IU, se ha constituido un Grupo de Trabajo que sistematizará las propuestas que han ido acordando nuestros órganos. Trabajaremos en consensuar sus contenidos con el resto de compañeras/os que conformamos la actual mayoría de IU. El Grupo de Trabajo está formado por camaradas que realizan su tarea en la dirección de IU y quienes la realizan en la dirección del PCE.

Uno de los objetivos es que los Documentos Asamblearios no estén en contradicción con los acuerdos de nuestra Conferencia Política y recojan las principales propuestas programáticas que trabajan las distintas secretarías del Partido-. Es importante trabajar colectivamente todos los contenidos de la Asamblea para despejar problemas y garantizar la máxima unidad, lo que permitirá que el proceso asambleario nos dé un impulso para presentarnos ante la clase trabajadora y capas populares como una organización solvente. Pretendemos desarrollar el proceso de convergencia política partiendo de la actual realidad de Unidas Podemos, mejorando su funcionamiento y capacidad de influencia social, política e institucional.

Este grupo se reunirá durante el periodo de preparación de la Asamblea en función de los plazos y ritmos que acuerde IU para su proceso asambleario y previamente deberá trabajar con las conclusiones alcanzadas por la conferencia del Partido.

Madrid, 5 de septiembre de 2020